Expediente: **12608/21**
Carátula: **PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- C/ MERLO PEREYRA DEBORAH SILVANA DEL VALLE S/ EJECUCION FISCAL**

Unidad Judicial: **OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA EN COBROS Y APREMIOS N° 1**
Tipo Actuación: **SENTENCIA INTERLOCUTORIA NOTIFICACION INDIVIDUAL**
Fecha Depósito: **15/04/2026 - 00:00**
Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:
90000000000 - MERLO PEREYRA, DEBORAH SILVANA DEL VALLE-DEMANDADO
20264086834 - PALIZA, IGNACIO JOSE-POR DERECHO PROPIO
33539645159 - CAJA DE PREVISION Y S.S. ABOGADOS Y PROC. -
23288838739 - PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.-, -ACTOR

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Oficina de Gestión Asociada en Cobros y Apremios N° 1

ACTUACIONES N°: 12608/21

H108013117657

JUICIO: "PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ MERLO PEREYRA DEBORAH SILVANA DEL VALLE s/ EJECUCION FISCAL" - EXPTE N°12608/21 - Juzgado de Cobros y Apremios 2 (M.L.B.)

San Miguel de Tucumán, 14 de abril de 2026.-

AUTOS y VISTO: la causa caratulada *"Provincia de Tucumán DGR c/ Merlo Pereyra Deborah Silvana del Valle s/ ejecución fiscal"* identificada con el número de expediente 12608/21, presentada por la actuaria a despacho a fin de emitir pronunciamiento respecto del pedido de regulación de honorarios deducido por el letrado Martín Miguel J. Rodriguez por su actuación profesional en la segunda etapa del proceso (ejecución de sentencia de fondo), y;

CONSIDERANDO:

Que, en los presentes autos el letrado **Martín Miguel J. Rodriguez,** solicita que se le regulen honorarios por su actuación en la segunda etapa de este juicio, correspondiendo en consecuencia, proceder al cálculo conforme lo normado por el art. 68 inc. b) de la ley 5480.

A tal efecto se debe, en principio, tomar como base regulatoria, el monto de los honorarios regulados en sentencia de fecha 25/02/2025 protocolizada con el número 1362, por la primera etapa del presente juicio, monto que asciende a la suma de $300.000, él que aún cuando fuera actualizado, sería inferior al valor actual de una consulta escrita (art.38 ley 5480) con más el 55% atento el doble carácter en el que el letrado actuó en representación de los intereses de rentas provincial.

Sin perjuicio con ello, cabe señalar que, la Excma Cámara del fuero en numerosos precedentes dijo: "La aplicación en casos como el presente de las pautas normales de la Ley Arancelaria conducirán a un resultado desproporcionado con la entidad, calidad e importancia de la tarea cumplida, por lo que cabe hacer uso de las facultades que confiere al órgano jurisdiccional la Ley 24.432, en su Art. 13" (Provincia de Tucumán C/Casamayor, María Alejandra S/Ejec. Fiscal, Expte. N° 14373/06,

Sentencia N° 655 del 28/12/07 entre otros).

En idéntico sentido indicó: "Luego de un análisis circunstanciado de las actuaciones cumplidas en la causa, este Tribunal estima que se dan las condiciones que justifican su aplicación –del art. 13 de la ley N° 24.432- en el caso concreto. En efecto, la magnitud de los honorarios estimados por la Juez de primera instancia a los letrados intervinientes, por las actuaciones cumplidas en el proceso principal por la suma por la que prospera la demanda, evidencian que la sujeción estricta, lisa y llana a los mínimos arancelarios conduciría a un resultado injusto en un proceso que tiene una significación patrimonial genuinamente de excepción, lo que ocasionaría una evidente e injustificada desproporción, más allá de la tarea realizada, entre la extensión e importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que sobre la base de aquéllas normas arancelarias habría de corresponderen el caso en concreto, se advierte que la estimación de los emolumentos de los letrados, mediante la aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley arancelaria local, aun del mínimo establecido (....), da como resultado sumas desproporcionadas en relación con las constancias de la causa; resultando además, incompatible tal retribución con el mérito, novedad, eficacia y tarea efectuada por el profesional. Repárese, que el presente juicio se trata de una ejecución fiscal, que constituye en rigor una ejecución abreviada o acelerada, que no tuvo un desarrollo complejo en cuanto al trámite, ni jurídicamente. El plexo probatorio ofrecido en autos se circunscribió sólo a la prueba instrumental e informativa. Sumado a ello, sin ánimo de menoscabar la labor jurídica cumplida por los profesionales, la cuestión debatida no ofreció problemas jurídicos o complicaciones procesales que hayan obligado a un afán mucho mayor por parte de éstos. Además, conforme a la naturaleza, complejidad y extensión temporal del trámite, no demandó una actuación intelectual de creatividad, esfuerzo y talento excepcional; como tampoco fue elevado el tiempo insumido en el caso, ni la solución tuvo suficiente trascendencia jurídica, moral o económica para casos futuros, que justifique el empleo del porcentual mínimo del arancel. En suma, teniendo en cuenta la importancia de la base regulatoria con relación a las restantes pautas contenidas en el arancel, y la falta de una paralela complejidad de la labor profesional -no obstante el resultado favorable obtenido por los beneficiarios de los honorarios, en el caso del letrado de la parte actora-, los estipendios estimados en primera instancia por el monto que prospera la ejecución evidencian una injustificada desproporción que nos obliga a apartarnos de los mínimos arancelarios.(CCDYL - Sala 3 Nro. Expte: A7486/14, Nro. Sent: 293 Fecha Sentencia: 08/10/2018).

Por lo reseñado y teniendo en cuenta el monto antes mencionado, corresponde actualizar la base de acuerdo a los parámetros del art. 38 "in fine" de la ley 5480, tomando como valor el de una consulta escrita, la cual asciende a la suma de $620.000.

Seguidamente, corresponde estimar el valor de las actuaciones realizadas en la segunda etapa del proceso, es decir la etapa que transcurre desde la emisión de la sentencia hasta su cumplimiento definitivo.

De este modo y analizando cada una de las actuaciones de los letrados que intervinieron en la mentada etapa, no solo las del peticionante, tendientes a la ejecución del capital reclamado en autos por la Provincia de Tucumán, a saber, 11/03/2025 donde el anterior letrado, Dr Ignacio Jose Paliza, acompaña la movilidad correspondiente a fin de notificar a la parte demandada la sentencia recaída en la causa, las realizadas el 12/06/2025, donde el nuevo apoderado fiscal Dr. Rodriguez peticiona oficio a los fines de conocer la suerte de dicha notificación y las actuaciones por este ultimo realizadas de fechas 31/07/2025 y 02/09/2025 donde actualizó el capital contenido en la sentencia de fondo y pago total y cancelatorio de lo que era debido a su cliente, en su mérito, corresponde regular por la segunda etapa (art.68 inc. ley 5480) el 20% del monto fijado como base regulatoria conforme los argumentos arriba expresados, arribando en consecuencia a la suma de $124.000.

Dicha suma por razones de justicia y conforme lo previsto por el art 12 de la ley 5480, corresponde distribuirla en proporción a la importancia jurídica de las respectivas actuaciones de los profesionales y la labor desarrollada por ellos. Así, y de acuerdo a las actuaciones arriba señaladas, corresponde a favor del letrado Ignacio Jose Paliza la suma de $18.000 correspondiente al 15% de la suma arriba señalada ($120.000) por su labor profesional en los estadios iniciales de la segunda etapa de la causa y, a favor del letrado Martin Miguel J. Rodriguez, la suma de $102.000 equivalente al restante 85%, por su actuación profesional posterior, en el trámite de la segunda etapa de esta causa (art.44 ley 5480).

Por ello;

RESUELVO:

PRIMERO: Fijar como base regulatoria la suma de **PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL ($620.000)** a los efectos de la regulación de honorarios profesionales por las actuaciones desarrolladas en la segunda etapa de la causa.

SEGUNDO: Regular los honorarios correspondientes al letrado **Ignacio José Paliza** en la suma de **PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000),** por las labores profesionales realizadas en la segunda etapa de este juicio. Regular los honorarios correspondientes al letrado **Martin Miguel J Rodriguez** en la suma de **PESOS CIENTO DOS MIL ($102.000)** por las labores profesionales realizadas en la segunda etapa de este juicio.

TERCERO: Notifíquese a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores a los efectos previstos en el art. 35 de la Ley 6.059.-

HÁGASE SABER. -

Actuación firmada en fecha 14/04/2026

Certificado digital:
CN=BERNI Adriana Elizabeth, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 23132194904

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán https://www.justucuman.gov.ar.